



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado Ponente

Radicación n° 2019-00065

Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Por reunir los requisitos exigidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud de la competencia que le corresponde a la Corte, de conformidad con lo dispuesto por el primer inciso del numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, **ADMÍTASE** la acción de tutela promovida por **YENNY MARITZA SÁNCHEZ MURCIA**; contra el **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL**; trámite al que se ordena vincular a la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**; y a todos los participantes del concurso N° 27, convocado por el Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, se dispone:

PRIMERO. Tener como pruebas, en su valor legal, las documentales aportadas con el escrito de tutela.

SEGUNDO. Correr traslado de la presente diligencia a las autoridades accionadas y a las partes vinculadas, para que dentro del término de un (1) día, se pronuncien sobre los hechos materia de la petición de amparo y remitan las documentales que consideren necesarias, a efecto de impartir el análisis de la solicitud impetrada por la parte accionante.

TERCERO. Notificar mediante fax, telegrama u otro medio expedito pero efectivo, la presente decisión a las autoridades judiciales accionadas y demás intervinientes, a quienes se les concede el término de un (1) día, para que puedan ejercer el derecho de defensa y de contradicción, si lo consideran conveniente.

CUARTO. Informarle a las autoridades accionadas, que las documentales que deseen aportar podrán ser remitidas vía correo electrónico a la dirección **«notificacioneslaboral@cortesuprema.ramajudicial.gov.co»**

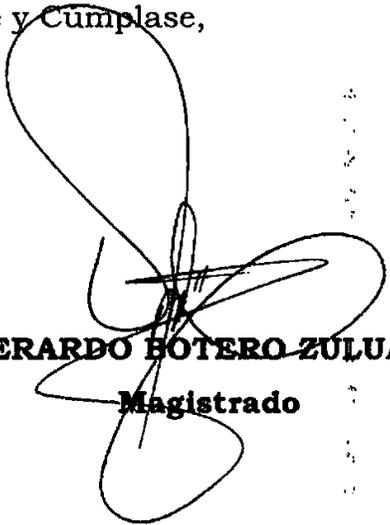
QUINTO. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia, publicar en las respectivas páginas web de sus instituciones la presente providencia, para que los interesados, puedan ejercer el derecho de defensa.

SEXTO: Aludiendo a la medida provisional solicitada, se resalta que la misma tiene por objeto *«la suspensión del término individual de 10 días para la interposición y sustentación del recurso de reposición contra la calificación, a fin de que el mismo no se extinga dentro del término de resolución de la tutela, habida cuenta que el éste (sic) concluye el día 1 de febrero de 2019»*; se tiene que la Corte Constitucional, entre otras sentencias en la T-030 del 26 de enero de 2015, refiriéndose al tema adoctrinó: *«En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable»*.

Ahora bien, determinar si es precisa y directa la vulneración de los derechos fundamentales que hoy buscan protección, como para que se determine decretar la medida provisional invocada, en virtud de la posible ocurrencia de un daño mayor, derivado del acto que se dictó en un trámite administrativo, es más bien objeto de pleno análisis en la sentencia respectiva, sustentada en el acervo probatorio del caso, y no en una decisión provisional. Así las cosas, se negará la medida solicitada por la accionante.

Cumplido lo anterior, vuelva el expediente al Despacho.

Notifíquese y Cúmplase,



GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado

Neiva, Enero 30 de 2019

Señor
JUEZ TERCERO PENAL ESPECIALIZADO DEL CIRCUITO DE NEIVA
Ciudad

Ref. ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL.

(Se advierte que el presente escrito de tutela se dirige a la autoridad judicial referida porque avocó en primer lugar el conocimiento de un asunto similar - artículo 1º del Decreto 1834 de 2015-)

YENNY MARITZA SÁNCHEZ MURCIA, mayor de edad e identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio manifiesto que interpongo ACCIÓN DE TUTELA contra la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, a fin de que se protejan mis derechos fundamentales de petición, debido proceso, derecho de defensa y contradicción y acceso a cargos públicos, con base en los siguientes:

I. HECHOS

1. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, convocó al concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria No. 027).
2. Cumpliendo con los requisitos exigidos, me inscribí para el cargo de Juez Administrativo y fui citada a la presentación de pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnicas, la cual fue aplicada el pasado 2 de diciembre de 2018.
3. El 14 de enero de 2019 fueron publicados en la página web de la Rama Judicial los resultados a la prueba de aptitudes y conocimiento a través del anexo de la Resolución No. CJR18-559.
4. La entidad accionada, no informó al momento de la apertura de la convocatoria, ni antes de la aplicación de la prueba ni al momento de publicación de los resultados, la metodología de calificación de la prueba.
5. En la Resolución CJR18559 se otorgó un término de 10 días para la interposición del recurso de reposición contra la calificación, el cual vence el 1 de febrero de 2019.
6. Con el fin de argumentar y controvertir la calificación en forma concreta, específica, clara y detallada, el 14 de enero de 2019¹ solicite el acceso y consulta al cuadernillo de examen, a mi hoja de respuesta y clave de respuesta (o respuestas correctas según el evaluador) del cargo de Juez Administrativo, en desarrollo de mi derecho de defensa y contradicción.
7. A la fecha de interposición de ésta acción constitucional, la accionada no ha dado respuesta a mi solicitud, pese a que se encuentra superado el término legal establecido en la Ley 1755 de 2015 (10 días), y es inminente el vencimiento del término concedido para interponer y sustentar el recurso de reposición (1 de febrero de 2019) contra la calificación que me excluye del concurso de méritos.

¹ Via correo electrónico y correo certificado.

II. PRETENSIONES

PRIMERA. Se tutelen mis derechos fundamentales de petición, debido proceso, derecho de defensa y contradicción y acceso a cargos públicos, y en consecuencia se ORDENE a la UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CARRERA JUDICIAL:

i) **PERMITIR** el acceso y consulta al cuadernillo de examen, a mi hoja de respuesta y clave de respuesta (o respuestas correctas según el evaluador) del cargo de Juez Administrativo dentro de la convocatoria 027, en la cual participe.

ii) **OTORGAR** un término individual de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al momento en que se permita el acceso a los documentos en mención para la interposición y sustentación del recurso de reposición contra la decisión contenida en la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018 *"Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial"*.

SEGUNDO. De manera **SUBSIDIARIA** se solicita que en el evento en que no se conceda la medida provisional de suspensión del término individual para la interposición y sustentación del recurso de reposición contra la calificación, se **ORDENE** a la accionada recepcionar y tener en cuenta los escritos de adición y complementación del mentado recurso, luego de que sea permitido el acceso y consulta al cuadernillo de examen, hoja de respuesta del concursante y clave de respuesta (o respuestas correctas según el evaluador).

III. MEDIDA PROVISIONAL

En atención a la garantía consagrada en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 y a fin de no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a mi favor, se solicita se ordene la suspensión del término individual de 10 días para la interposición y sustentación del recurso de reposición contra la calificación, a fin de que el mismo no se extinga dentro del término de resolución de la tutela, habida cuenta que el éste concluye el día 1 de febrero de 2019.

Lo anterior, en procura de evitar la consumación de un **PERJUICIO IRREMEDIABLE**, como lo es el vencimiento del término concedido para la interposición del recurso de reposición contra la decisión que comunicó la calificación que me excluye del concurso de méritos², teniendo en cuenta que la presentación del enunciado recurso sin haber accedido a los mentados documentos me impide ejercer mi derecho de defensa y contradicción, habida cuenta que no podre controvertir con argumentos serios y fundados la calificación asignada.

De igual manera, no es posible que se me exija el agotamiento del **recurso de insistencia** establecido en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, teniendo en cuenta que la Administración no ha emitido una respuesta negativa a mi solicitud y en evento que así fuera (como ha pasado con otros concursantes), el vencimiento de dicho recurso extraordinario se presentaría por fuera del término otorgado para interponer mi recurso de reposición contra la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, hecho que haría nugatoria la garantía de mi derecho fundamental al debido proceso en sus facetas de defensa y contradicción, conllevando a la configuración de un perjuicio irremediable.

Adicionalmente es preciso tener en cuenta que la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al **DEBIDO PROCESO** y la oportunidad de conocer la decisión de la Administración en un concurso de méritos para poder controvertirla, ha sostenido que dicho derecho se vulnera ante la imposibilidad de **CUESTIONAR REALMENTE** la decisión administrativa, al permitírsele al interesado presentar una reclamación en contra de ésta pero no poder presentar pruebas, inclusive para este caso conocer

² Lo cual puede ser corroborado en la página web de la rama judicial, link carrera judicial; convocatoria 27.

las preguntas y las respuestas correctas, decayendo entonces en una actuación meramente formal que sugiere la posibilidad de objeción pero en la práctica no implica una real contradicción y defensa, máxime cuando la reclamación referida será resuelta con base en los hechos que motivaron la decisión cuestionada, resaltándose que en el sub lite se desconocen.

Es que la Corte Constitucional³ sostuvo que:

"Desconociéndose con ello que una de las garantías que implica el derecho al debido proceso es el derecho de defensa y de contradicción. Para la Corte, "la efectividad de ese derecho en las instancias administrativas supone la posibilidad de que el administrado interesado en la decisión final que se adopte con respecto de sus derechos e intereses, pueda cuestionarla y presentar pruebas, así como controvertir las que se alleguen en su contra (CP, art. 29), pues, a juicio de la Corte, de esta forma se permite racionalizar el proceso de toma de decisiones administrativas, en tanto que ello evidentemente constituye un límite para evitar la arbitrariedad del poder público".

IV.FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

4.1. Procedencia de la Acción de Tutela.

La Honorable Corte Constitucional, ha considerado que la acción de tutela en materia de concursos de méritos es procedente en la medida que el medio ordinario de discusión de los actos administrativos en la Jurisdicción Contenciosa Administrativo, no ofrece una protección legítima y eficaz en la medida que no se puede realizar un amparo definitivo, y además el proceso decaerían en un estado de indefinición que perjudicarían las condiciones del concurso.

Específicamente el precedente de la Corte Constitucional⁴ en la materia, sostiene que la solicitud de amparo constitucional procede en alguna de las siguientes hipótesis: i) cuando no existen mecanismos judiciales de defensa para proteger un derecho constitucional; ii) cuando existen esos medios de defensa pero, en el marco del caso concreto, no resultan idóneos o eficaces para conjurar la amenaza o violación del derecho; o, iii) cuando la acción se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En mi caso, la solicitud de amparo constitucional se interpone como mecanismo transitorio en procura de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, como lo es la exclusión del concurso de méritos, porque si bien es posible interponer el recurso horizontal, materialmente no se estaría controvirtiendo el resultado, al desconocerse las preguntas y respuestas correctas y adicionalmente aportar los medios de prueba que permitan refutar dicha decisión.

4.2. Procedencia de la Acción de tutela frente a calificación de pruebas.

Asimismo el alto tribunal constitucional ha determinado que la acción de tutela es procedente para controvertir los puntajes asignados en las pruebas realizadas en los concursos de méritos, en la medida que en dichos procesos son esas instancias las que permiten la clasificación de los concursantes y además que las posibles acciones ordinarias no son eficientes para la solución y protección de los derechos fundamentales por cuanto los cronogramas de los concursos tiene tiempos de definición de listas de elegibles, que conllevan al nombramiento y posesión en el cargo, que harían más gravosa la situación. Por ejemplo, en la Sentencia T-800/11, manifestó:

³ Corte Constitucional, sentencia T-441/2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.

⁴ Entre otras, en las providencias T-575 de 1997, T-994 de 2010, T-383 de 2010, SU-257 de 1999, T-400 de 2006, SU-613 de 2002, SU-086 de 1999, T-090 de 2013.

"Aun cuando para este caso hay otro medio de defensa judicial susceptible de ser ejercido ante la justicia contencioso-administrativa, lo cierto es que no puede asegurarse que sea eficaz, pues la terminación del proceso podría darse cuando ya se haya puesto fin al concurso de méritos, y sea demasiado tarde para reclamar en caso de que el demandante tuviera razón en sus quejas. Ciertamente, el peticionario podría reclamar ante el juez contencioso la suspensión provisional del acto de asignación de puntajes que cuestiona como irregular, pero incluso si se le concediera esta decisión no tendría la virtualidad de restablecer de inmediato los derechos del accionante y, en cambio, podría dejarlo en una situación de indefinición perjudicial en el trámite de las etapas subsiguientes del concurso."

La misma alta corporación en la sentencia SU-133 de 1998, sostuvo que se quebranta el derecho al debido proceso; al decir:

"según el artículo 29 de la Constitución obliga en todas las actuaciones administrativas- y se infiere un perjuicio cuando el nominador cambia las reglas de juego aplicables al concurso y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. Así mismo, se lesiona el derecho al trabajo cuando una persona es privada del acceso a un empleo o función pública a pesar de que el orden jurídico le aseguraba que, si cumplía con ciertas condiciones -ganar el concurso-, sería escogida para el efecto. En idéntica línea se conculca el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, cuando se otorga trato preferente y probadamente injustificado a quien se elige sin merecerlo, y trato peyorativo a quien es rechazado no obstante el mérito demostrado..."

"...Lo contrario equivaldría a vulnerar el principio de la buena fe -Artículo 83 de la Carta- al defraudar la confianza de quien se sometió a las reglas establecidas para acceder a un cargo de carrera administrativa después de haber superado todas las pruebas necesarias para determinar que él había ocupado el primer lugar y, por contera, los derechos adquiridos en los términos del artículo 58 Superior."

4.3. De la Constitucionalidad del artículo 164 parágrafo 2 de la ley 270 de 1996

Teniendo en cuenta que la accionada ha cimentado la respuesta dada a otros concursantes en la expresa consagración de reserva en la ley estatutaria de justicia y control de constitucionalidad efectuado en la sentencia C-037 de 1996.

Debo recordar que yo no afirmo la inconstitucionalidad de la ley, la cual ya fue examinada y decidida, lo que refuto es la interpretación que aplica la entidad, que antes de contrariar mi argumento ratifica que tengo derecho a conocer lo solicitado. Dice la sentencia C-037 de 1996:

La presente disposición acata fehacientemente los parámetros fijados por el artículo 125 superior y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional⁵, en el sentido de que el concurso de méritos, como procedimiento idóneo para proveer los cargos de carrera, debe cumplir una serie de etapas que garanticen a las autoridades y a los administrados que el resultado final se caracterizó por la transparencia y el respeto al derecho fundamental a la igualdad. (Art. 13 C.P.). Por ello, al definirse los procesos de convocatoria, selección o reclutamiento, la práctica de pruebas y la plaboración final de la lista de elegibles o clasificación, se logra, bajo un acertado sentido democrático, respetar los lineamientos que ha trazado el texto constitucional. Con todo, debe advertirse que "las pruebas" a las que se refiere el Parágrafo Segundo, son únicamente aquellas relativas a los exámenes que se vayan a practicar para efectos del concurso. (Resaltado propio)

Las pruebas son reservadas, pero la Corte Constitucional definió en forma expresa y definitiva un tiempo de "las pruebas", a futuro "los exámenes que se vayan a practicar"; con lo cual no existe discusión, es más lo comparto plenamente, pues si me encuentro en un concurso no debo ni puedo conocerla, pero lo

⁵ Corte Constitucional. Sentencia No. C-040 del 9 de febrero de 1995. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.

que no puede la entidad es escudarse en una norma que tiene un expreso estudio de constitucionalidad y darle otro efecto, como es el mantener una reserva a una prueba ya practicada tiempo pasado, y que además es necesario y esencial para controvertir la decisión de la calificación.

4.4. Del acceso a los documentos y debido proceso

En el escrito de petición esboce y transcribí dos sentencias del Consejo de Estado, frente a la constitucionalidad de la Reserva de la ley 909 de 2004 de las pruebas y derecho constitucional de acceso al concursante en las mismas condiciones de mi solicitud, cuadernillo, hoja de respuestas del concursante y clave de respuestas correctas de la evaluación.

Donde no se discute que esté en una u otra ley la reserva, el sostén es el derecho fundamental consagrado en el artículo 29, **SU ESENCIA ES LA MISMA LA POSIBILIDAD DE CONOCER LA EVALUACIÓN PARA PODER CONTROVERTIRLA**, donde no es PREDICABLE LA RESERVA AL CONCURSANTE A SU PRUEBA. Me permito referenciar por lo menos siete (7) sentencias del Consejo de Estado que realizan esta interpretación y han tutelado el derecho al debido proceso y han garantizado el acceso a la prueba:

- 25000234100020120020801 del 25/10/12
- 25000234100020120014001 del 23/10/12
- 25000234200020130111401 del 23/05/13
- 19001233300020120058201 del 31/01/13
- Expediente 2012-00492-01 del 15/11/12
- Expediente 2012-00117-01 del 01/11/12
- Expediente 2012-00208-01 del 25/10/12

Y para no extenderme mucho transcribo aportes de vital importancia en el criterio de interpretación, en providencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), Radicación número: 19001-23-33-000-2012-00582-01(AC):

"Aunado a lo anterior, y frente a la reserva establecida en los artículos 31 de la Ley 909 de 2004 y 34 del Decreto 765 de 2005, se reitera que la Subsección A de esta Sección, en la sentencia del 13 de septiembre de 2012, señaló que los concursantes tienen acceso a su propia prueba, más no respecto a las pruebas de los demás aspirantes, en otras palabras, que la reserva consagrada es oponible solamente a terceros.

En similares términos se pronunció esta Subsección en la sentencia del 23 de octubre de 2012, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, citada previamente:

(...)

Aunado a lo anterior, la Sala resalta que no autorizar el acceso de los concursantes a sus propias pruebas, cuestionarios y respuestas, bajo la interpretación esbozada por la CNSC y la Universidad de San Buenaventura, vulnera el derecho al debido proceso de los interesados, pues al no permitírsele al aspirante que reclama tener acceso a las preguntas y respuestas, se restringe considerablemente su derecho a controvertir las pruebas que son materia de su inconformismo"

En conclusión, por las razones expuestas se evidencia que la parte accionada al resolver la reclamación del accionante contra la decisión de excluirlo del proceso de selección, vulneró sus derechos de petición y al debido proceso, pues respondió de forma evasiva a sus solicitudes y motivos de inconformidad, y porque invocando el numeral 3º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, se negó a brindarle la oportunidad de conocer las pruebas aplicadas y sus respuestas para ejercer en debida forma su

derecho a la defensa, aún cuando como lo ha establecido esta Sección, la norma antes señalada debe entenderse en el sentido de que cada participante tiene derecho acceder a su propia prueba, más no a la de los demás aspirantes.⁴⁶

En consideración a que los concursantes que pretendían controvertir las decisiones en su contra le **fueron negados los documentos necesarios para ejercer su defensa, que constituye un elemento esencial del derecho al debido proceso**, esta Sala decisión le ha ordenado a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad San Buenaventura - Seccional Medellín (Rector y Equipo de Reclamaciones), que le permitan a los interesados el acceso a sus pruebas así como a sus respectivas respuestas, para que con fundamento en ellas, formulen dentro de los dos días siguientes las reclamaciones respectivas."

En providencia del veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013) y Radicación número: 25000-23-42-000-2013-01114-01(AC) dijo:

"No obstante lo anterior, informa la demandante en esta instancia, que en ejecución de la orden antes señalada sólo se le permitió tener acceso al cuestionario realizado y a sus respuestas, **pero no le suministró la información necesaria para establecer cuáles de las opciones que marcó fueron consideradas correctas y cuáles incorrectas**, motivo por el cual seguía sin contar con los elementos de juicio necesarios para ejercer su derecho a la defensa.

Frente a dicha situación se observa, que si bien es cierto en los fallos de tutela que ha proferido esta Sección frente a casos similares, se le ha ordenado a la parte accionada que le entregue a los concursantes el cuestionario y sus preguntas, sin que se indique expresamente que éstos tengan conocimiento de los aciertos y desaciertos que tuvieron, **dichos pronunciamientos han sido totalmente claros en precisar que el sentido de la protección es que los participantes del concurso de méritos tengan la posibilidad de conocer cómo fueron calificados**; a fin de que puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes con los elementos de juicio necesarios.

Por la anterior circunstancia, **si la parte demandada no le suministra a los concursantes**, y en el caso objeto de estudio a la señora Ruth Mabel Olivera Arce, **la información necesaria para que la misma conozca las preguntas que en principio resolvió incorrectamente, la peticionaria no puede ejercer en debida forma su derecho a la defensa, en tanto se reitera, no se le está indicando cuáles fueron los errores que cometió**, ni cuál de las opciones que podía seleccionar era la correcta frente a cada interrogante.

En ese orden de ideas **estima la Sala que la actitud de la parte accionada para dar cumplimiento al fallo de primera instancia es contraria al derecho a la defensa de la peticionaria**, y aún más, desconoce las razones por las que se concedió el amparo solicitado, **en tanto no puede alegar que le brindó a la accionante la oportunidad de conocer los documentos necesarios para que presentara la reclamación contra la calificación que le fue asignada, si no le indicó a la misma qué preguntas resolvió incorrectamente**, y frente a las mismas cuál es la opción correcta, toda vez que sin esa información, la demandante no puede exponer las razones por las cuales no comparte el puntaje que obtuvo.

Por lo tanto, en aras de garantizar que a la peticionaria se le brinde material y no sólo formalmente la oportunidad de controvertir los resultados que obtuvo, se modificará la orden emitida por el A quo, relacionada con la oportunidad de permitirle acceder a las pruebas que presentó el 29 de abril de 2012 y **a sus respuestas, en el sentido de adicionar que también debe permitírsele conocer los errores cometió y cuáles son en criterio de las entidades demandadas las opciones correctas**. Lo anterior,

⁴⁶ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 15 de noviembre de 2012, expediente 2012-00492-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. En similar sentido también puede apreciarse la sentencia emitida por esta Subsección el 1° de noviembre de 2012, expediente 2012-00117-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

7
7
para que después de que se le brinde dicha oportunidad, en el término de 2 días presente la reclamación que estime pertinente.

(...)

Frente a dicha situación estima la Sala, que si bien es razonable que la parte demandada adopte algunas medidas de seguridad para impedir que las pruebas aplicadas y sobre sus respuestas sean alteradas, también lo es que el concursante que pretende revisar la calificación que le fue asignada, debe tener la posibilidad de realizar las anotaciones personales que estime pertinentes, a fin de que posteriormente si lo estima necesario, presente de manera fundada, clara y precisa su reclamación, de lo contrario implicaría exigirle que debe memorizar las preguntas frente a las cuales estima que se cometió un error, sobre todo cuando para la revisión de dichos documentos se le concedió un tiempo limitado.

En efecto, no se trata simplemente que a los concursantes se les garantice formalmente la oportunidad de apreciar las pruebas con las que están inconformes, sino que en ejercicio pleno del derecho a la defensa puedan analizar con detenimiento éstas, circunstancia que estima la Sala no se le garantizó a la demandante, a quien se le concedieron 2 horas para analizar los referidos documentos, y al parecer se le impidió realizar sus anotaciones personales, a partir de las cuales se reitera, eventualmente puede sustentar su reclamación." (Resaltado propio)

Por la anterior circunstancia, se le ordenará a las entidades accionadas, que al brindarle la oportunidad a la peticionaria de revisar las pruebas que se le aplicaron con sus correspondientes respuestas, así como las que ella seleccionó, se le permita realizar las anotaciones personales que estime pertinentes, adoptado las medidas de seguridad que consideren pertinentes." (Resaltado propio)

V. PRUEBAS

1. Solicitud de acceso a los documentos contenidos como cuadernillo de preguntas, hoja de respuestas del concursante tutelante y clave o respuestas consideradas como correctas, remitida el 14 de enero de la presente anualidad, vía correo electrónico y correo certificado.
2. Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018. "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial".
3. Anexo Resolución CJR18-559⁸
4. Constancia de Fijación⁹

VI. COMPETENCIA

En concordancia con el artículo 86 de la Constitución y el artículo 37 del decretos 2591 de 1991, son competentes a prevención los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud de amparo constitucional, que para el caso particular se dan en mi domicilio en la ciudad de Neiva (H), que es donde se genera los efectos de la vulneración de mis derechos fundamentales.

Es importante resaltar que de conformidad con el calificado parecer de la H. Corte Constitucional¹⁰ la **única facultad que tiene un juez para declarar la falta de competencia para conocer de una acción**

⁷ <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/21981712/CJR18-559.pdf/d88279b1-6495-46b4-b0c3-e31603795a58>

⁸ <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/21981712/CJR18-559-+-Anexo.pdf/1fb9fdce-9506-4a32-8bcc-bfd4b87ef67>

⁹ <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/21981712/CJR18-559-CF.pdf/bca38101-7332-44ed-a022-586b1f2ba0f>

¹⁰ Corte Constitucional, Autos 124 y 198 de 2009; 109 de 2011; 483 de 2016.

de tutela es con base en el factor territorial o cuando la tutela es interpuesta contra los medios de comunicación.

De esta manera, no le está permitido al juez de tutela declarar su falta de competencia por indebida aplicación de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1983 de 2017 o por haberse efectuado un mal reparto de la acción, como quiera que de conformidad con el mismo artículo 37 del citado Decreto 2591, todos los Jueces de la República con jurisdicción donde ocurriere la presunta violación o la amenaza de los derechos fundamentales invocados como tal, son competentes a prevención para conocer de la acción presentada¹¹.

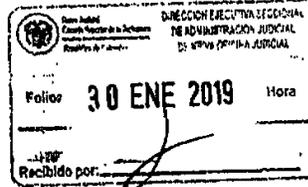
VII. NOTIFICACIONES

A la entidad demandada en la seccional Huila, Edificio Palacio de Justicia tercer piso o en su sede Nacional en la Calle 12 No. 7-65 de Bogotá, email: carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co

A la actora en la carrera 4 número 12-37 de la ciudad de Neiva, teléfono 8715982, celular 315 515 12 04 y correo electrónico abogada_murcia@hotmail.com

Atentamente;


YENNY MARITZA SÁNCHEZ MURCIA
C.C. 1.075.223.646 de Neiva



¹¹ Tribunal Administrativo del Huila, auto del 4 de mayo de 2017, rad. 410012333000-2017-00200-00. M.P. Jorge Alirio Cortés Soto.

8

9

29/1/2019

Correo: Yenny Sánchez Murcia - Outlook

Derecho de Petición exhibición cuadernillo de examen Convocatoria 27

Yenny Sánchez Murcia

Lun 14/01/2019 4:48 PM

Para: carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co <carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: cgranadr@consejosuperior.ramajudicial.gov.co <cgranadr@consejosuperior.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (225 KB)

Petición Exhibición cuadernillo Conv 27.pdf;

Cordial saludo:

Me permito adjuntar derecho de petición a fin de tener acceso al cuadernillo de examen, hoja de respuesta y clave de respuesta.

Atentamente,

YENNY MARITZA SÁNCHEZ MURCIA

C.C. 1.075.223.646 de Neiva

Celular: 315 515 12 04

8

Neiva, 14 de enero de 2019

Señores
UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Bogotá D.C.

Ref. Derecho de petición

YENNY MARITZA SÁNCHEZ MURCIA, mayor de edad e identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio y en uso del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 Constitucional y reglamentado en la ley 1755 de 2015, en aras de la protección de los derechos fundamentales al acceso de documentos, debido proceso y acceso a cargos públicos solicito:

1. PRETENSIONES

PRIMERA. PERMITIR el acceso y consulta al cuadernillo de examen, a mi hoja de respuesta y clave de respuesta (o respuestas correctas según el evaluador) del cargo de Juez Administrativo dentro de la convocatoria 027, en la cual participo.

SEGUNDO. Que en aras del respeto del derecho de igualdad y debido proceso, como de no generar traumatismos administrativos, solicito se **OTORGUE** un término individual de 10 días contados luego del acceso a los documentos, para la interposición y sustentación de los recursos (Artículo 4 de la Resolución No. CJR18-559 del 28 de diciembre de 2018).

TERCERO. INFORMAR si fue excluida de calificación alguna pregunta formulada en la prueba de aptitudes y conocimientos en desarrollo del concurso de méritos para la conformación del Registro Nacional de Elegibles para los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante el Acuerdo PCSJA18- 11077 de 2018 y aplicada el pasado 2 de diciembre de 2018.

2. HECHOS

2.1. Cumpliendo con los requisitos exigidos, me inscribí, fui citado a presentación de pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnicas, dentro de la convocatoria 027 para el cargo de Juez Administrativo.

2.2. La entidad a través de la información existente en la página web www.ramajudicial.gov.co, y acuerdo de convocatoria PCSJA18-11077, no determinó como fase o procedimiento el acceso a los cuadernillos de preguntas, respuestas y opciones de calificación, como garantía a los participantes para controvertir su calificación.

De ahí que para este Tribunal la excepción a la citada reserva deba aplicarse para el participante que presentó las pruebas y que se encuentra en curso de una reclamación, aun sin mediar autorización de la CNSC u otra entidad competente.

Es evidente que con ello se garantiza el derecho de contradicción y defensa contenido en el artículo 29 Superior, como lo refirió el juez de segunda instancia: "no permitírsele a la reclamante conocer la evaluación y sus respuestas, equivale a impedirle controvertir las pruebas con las cuales fundamenta su descontento a la calificación, y en consecuencia la transgresión el debido proceso, pues no puede olvidarse que este último es de rango Constitucional, y dicha prohibición establecida en un decreto no puede vulnerarlo, pues de acuerdo con el artículo 4° de la Carta Constitucional se debe dar prevalencia a la primera[62]".

La reticencia de los organizadores de un proceso de selección a permitir el conocimiento de las hojas de respuestas y las pruebas adelantadas por cualquier aspirante, claramente desconoce las mencionadas garantías superiores, como quiera que con ello se impide que pueda corroborar sus calificaciones a fin de efectuar las reclamaciones judiciales y extrajudiciales que considera necesarias." (Resaltado propio)

Posición que había tomado ya con anterioridad por el Consejo de Estado y me permito referenciar por lo menos siete (7) sentencias; 25000234100020120020801 del 25/10/12, 25000234100020120014001 del 23/10/12, 25000234200020130111401 del 23/05/13, 19001233300020120058201 del 31/01/13, 2012-00492-01 del 15/11/12, 2012-00117-01 del 01/11/12, y 2012-00208-01 del 25/10/12.

Sus palabras en providencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), Radicación número: 19001-23-33-000-2012-00582-01(AC):

"Aunado a lo anterior, y frente a la reserva establecida en los artículos 31 de la Ley 909 de 2004 y 34 del Decreto 765 de 2005, se reitera que la Subsección A de esta Sección, en la sentencia del 13 de septiembre de 2012, señaló que los concursantes tienen acceso a su propia prueba, más no respecto a las pruebas de los demás aspirantes, en otras palabras, que la reserva consagrada es oponible solamente a terceros.

(...)

Aunado a lo anterior, la Sala resalta que no autorizar el acceso de los concursantes a sus propias pruebas, cuestionarios y respuestas, bajo la interpretación esbozada por la CNSC y la Universidad de San Buenaventura, vulnera el derecho al debido proceso de los interesados, pues al no permitírsele al aspirante que reclama tener acceso a las preguntas y respuestas, se restringe considerablemente su derecho a controvertir las pruebas que son materia de su inconformismo"

En conclusión, por las razones expuestas se evidencia que la parte accionada al resolver la reclamación del accionante contra la decisión de excluirlo del proceso de selección, vulneró sus derechos de petición y al debido proceso, pues respondió de forma evasiva a sus solicitudes y motivos de inconformidad, y porque invocando el numeral 3° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, se negó a brindarle la oportunidad de conocer las pruebas aplicadas y sus respuestas para ejercer en debida forma su derecho a la defensa, aún cuando como lo ha establecido esta Sección, la norma antes señalada debe entenderse en el sentido de que cada participante tiene derecho acceder a su propia prueba, más no a la de los demás aspirantes."

³ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 15 de noviembre de 2012, expediente 2012-00492-01. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. En similar sentido también puede apreciarse la sentencia emitida por esta Subsección el 1° de noviembre de 2012, expediente 2012-00117-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

cuales estima que se cometió un error, sobre todo cuando para la revisión de dichos documentos se le concedió un tiempo limitado.

En efecto, no se trata simplemente que a los concursantes se les garantice formalmente la oportunidad de apreciar las pruebas con las que estén inconformes, sino que en ejercicio pleno del derecho a la defensa puedan analizar con detenimiento éstas, circunstancia que estima la Sala no se le garantizó a la demandante, a quien se le concedieron 2 horas para analizar los referidos documentos, y al parecer se le impidió realizar sus anotaciones personales, a partir de las cuales se reitera, eventualmente puede sustentar su reclamación." (Resaltado propio)

Por la anterior circunstancia, se le ordenará a las entidades accionadas, que al brindarle la oportunidad a la peticionaria de revisar las pruebas que se le aplicaron con sus correspondientes respuestas, así como las que ella seleccionó, se le permita realizar las anotaciones personales que estime pertinentes, adoptado las medidas de seguridad que consideren pertinentes." (Resaltado propio)

4. PRUEBAS

Solicito a la entidad tener como pruebas que acreditan mi calidad de concursante y presentación del examen las que posee en su propia entidad, al ser la entidad que regula el mismo, se hizo la inscripción ante ella y es la única que posee esa información, además la ley 962 de 2005 artículo 11 prohíbe la solicitud de documentos o prueba que reposan en la entidad, parámetro que está vigente y ratificado por diferentes normas antitrámites.

5. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en la carrera 4 No. 12-37 de la ciudad de Neiva, celular 315 515 12 04 y correo electrónico abogada_murcia@hotmail.com

Atentamente,


YENNY MARITZA SÁNCHEZ MURCIA
C.C. 1.075.223.848 de Neiva